

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
SALA DE ORALIDAD

Auto Interlocutorio

Radicación: 76001-23-33-000-2018-00703-00
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LABORAL)
Demandante: ADRIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
(c.castillo@castilloracines.com)
Demandado: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA ESE
(notificacionesjudiciales@huv.gov.co)
Asunto: EXCEPCIÓN PREVIA DE FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL. FACTOR CUANTÍA

Santiago de Cali, diez (10) de diciembre de dos mil veinte (2020)

1. El proceso está pendiente de celebrar audiencia inicial, pero se advierte la falta de competencia –excepción previa– del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para conocer del asunto en primera instancia.

2. En términos simples, la Sección Cuarta del Consejo de Estado (2016)¹ definió la competencia como «la facultad que se asigna a determinado órgano judicial (unipersonal o colectivo) para conocer y resolver un negocio». A su turno, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado (2013)² ha dicho que «determinar a qué Juez corresponde el conocimiento de un determinado asunto es cuestión que queda reservada al legislador, y ello supone distribuir de manera vertical y horizontal a lo largo de la jurisdicción contenciosa administrativa, entre Jueces, Tribunales Administrativos y Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, los medios de control de los cuales tiene conocimiento en general esta instancia».

3. Para asignar la competencia dentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el legislador acudió a diversos criterios³: el objetivo, el subjetivo, el funcional, el territorial, entre otros.

¹ Auto del 13 de octubre de 2016, expediente 25000-23-24-000-2012-00768-01 (20359).

² Providencia del 17 de octubre de 2013, expediente 11001-03-26-000-2012-00078-00 (45679).

³ Providencia del 16 de noviembre de 2016, expediente 11001-03-26-000-2014-00043-00(50430), C.P. Hernán Andrade Rincón: «i) el objetivo, que atiende a la naturaleza del litigio y/o a la cuantía de las pretensiones, ii) el subjetivo, en el que se mira la calidad de los sujetos de la relación procesal, bien sea el demandante o el demandado, iii) el territorial, que hace referencia a la circunscripción territorial o nacional dentro de la cual el juez ejerce su jurisdicción, iv) el funcional, que se atiende a la instancia (primera o segunda) o la naturaleza del recurso o mecanismo que se

4. En lo que interesa a este medio de control, debe destacarse que el criterio funcional adscribe a las distintas autoridades judiciales la instancia en la que deben conocer cada asunto, es decir, si el conocimiento debe asumirse en única, en primera o en segunda instancia. La distribución de las instancias está dada por varios aspectos: el nivel de autoridad o calidad del funcionario que expide el acto, la naturaleza del acto administrativo objeto de control, la cuantía de las pretensiones, entre otras circunstancias.

5. En ese escenario, el numeral 6° del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 establece que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia *«de los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes»*. En cambio, cuando la cuantía no exceda los 50 salarios mínimos legales vigentes, la competencia corresponderá en primera instancia a los juzgados administrativos, de conformidad con el numeral 2° del artículo 155 de la Ley 1437 de 2011.

6. Para efectos de la competencia por razón de la cuantía, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 prevé que la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por la parte actora en la demanda. Si bien se permite que la cuantía sea determinada por la parte demandante, lo cierto es que la norma exige una *«estimación razonada»*.

7. Ese mismo artículo prevé que *«cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años»*.

8. En el presente medio de control, la demandante pretende⁴ la nulidad: i) del oficio 6472 del 19 de diciembre de 2017 (folio 23 del expediente), ii) del oficio 6634 del 29 de diciembre de 2017 (folio 22 del expediente) y iii) del oficio 0070 del 22 de enero de 2018 (folios 13-17). A título de restablecimiento del derecho, pretende el reconocimiento y pago de la bonificación otorgada en la Resolución DG-2828-10 del 15 de septiembre de 2010, equivalente al 35 % de la asignación básica, desde el 30 de septiembre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2017.

interponga, y v) el de conexión, cuando se presenta una acumulación de pretensiones, o cuando la ley le asigna un proceso o incidente al juez que conoció previamente de un proceso o actuación principal, y vi) el de atracción, esto es, cuando se demanda a una entidad pública y a un particular, el juez de este último será el mismo que le corresponde al Estado, sin importar el régimen jurídico aplicable (v.gr. normas de derecho privado)».

⁴ Folio 55 (vuelto) del expediente.

9. En la demanda, la parte actora estimó la cuantía en \$ 39'213.7444, con base en la siguiente tabla⁵:

Asigna. Básica	IPC	Año	Valor	Valor a pagar - 2017	% Bonif	Valor a pagar x mes	# de meses a pagar	Total:
\$ 4.231.548		2017			0,35	\$ 1.481.042	9	\$ 13.329.376
\$ 2.919.663	0,0575	2016	\$ 167.881	\$ 2.751.782	0,35	\$ 963,124	12	\$ 11.557.486
\$ 2.751.782	0,0617	2015	\$ 169.785	\$ 2.581.997	0,35	\$ 903.699	12	\$ 10.844.388
\$ 2.581.997	0,366	2014	\$ 94.501	\$ 2.487.496	0,35	\$ 870.624	4	\$ 3.842.494
Total:								\$ 39.213.744

10. Conviene destacar que la bonificación pretendida tiene la connotación de prestación periódica de término indefinido, pues, según la *causa petendi*, la señora Adriana González González la recibía —o tenía derecho a hacerlo— de manera mensual mientras estuvieran vigentes la relación laboral y la Resolución DG-2828-10 del 15 de septiembre de 2010.

11. En virtud de esa connotación, la prestación reclamada estaba sujeta al límite temporal de los tres años. Es decir, si bien la bonificación pudo haberse causado por un lapso superior a tres años, lo cierto es que, para efectos de la cuantía, únicamente deben tenerse en cuenta los valores que correspondan a los último tres años.

12. Así lo entendió la parte demandante, toda vez que en las pretensiones solicitó el reconocimiento y pago de la bonificación desde el 30 de septiembre de 2010, pero en la determinación de la cuantía tomó únicamente los últimos tres años (2014 a 2017).

13. Sin embargo, hay una equivocación evidente en el cuadro elaborado por la parte demandante, porque al sumar los valores de la columna «# de meses a pagar» se obtiene un total de 37 meses, cuando, en realidad, tres años corresponden a 36 meses. Ese error se debe a que la demanda relacionó cuatro (4) meses en el año 2014 (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), pero lo correcto era incluir tres (3) meses únicamente (octubre, noviembre y diciembre), pues el mes de septiembre iba a ser tenido en cuenta en el año 2017, que relacionó nueve (9) meses (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre-).

14. Así las cosas, al excluir el mes adicional (que excede los tres años) en la estimación razonada de la parte actora, la cuantía pasa de \$ 39.213.744 a \$ 38.343.120, valor que resulta ser inferior a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el 2018 (año de presentación de la demanda). En efecto, el salario mínimo legal vigente para el año 2018 era de \$ 781.242 y 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para ese año ascendían a \$ 39.062.100.

⁵ Folio 57 (vuelto) del expediente.

15. También se evidencia que el cuadro elaborado por la parte demandante presenta errores en los resultados que se incluyen en la columna «valor a pagar x mes», por cuanto al aplicar el porcentaje del 35 % a las asignaciones básicas de los años 2014, 2015 y 2016 se obtienen valores distintos a los relacionados en el cuadro.

16. Independientemente de ello, la Sala considera que la demanda parte de asignaciones básicas que no coinciden con los documentos que obran en el expediente, circunstancia que, desde luego, ocasiona un desfase en la estimación de la cuantía.

17. En primer lugar, se destaca que con la demanda no se aportó algún documento que permitiera establecer con certeza cuáles eran las asignaciones básicas percibidas por la señora Adriana González González para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

18. Lo único que obra es una certificación del 13 de julio de 2017 (último año en que laboró la demandante para el hospital) en la que se hace constar que «la señora Adriana González González (...) presta sus servicios a la institución mediante nombramiento en propiedad a partir de ABRIL 15 DE 1992 A LA FECHA, desempeñando el cargo de PROFESIONAL UNIVERSITARIO, en el área de SUBDIRECCIÓN BANCO DE SANGRE, con asignación mensual básica de \$ 2.919.663.00 y un promedio de \$ 4.231.548»⁶.

19. Como se ve, para el mes de julio de 2017, la señora Adriana González González devengaba una asignación básica de \$ 2.919.663 y un promedio de «\$ 4.231.548». La certificación no hace alusión al tiempo que se tomó para calcular el promedio, pero la parte demandante entendió que era el promedio de la asignación básica del año 2017.

20. De ser así, la asignación básica promedio comprendía únicamente de enero a julio de 2017 (fecha de la certificación), pero, en todo caso, los meses de agosto y septiembre de 2017 se mantuvo la asignación certificada de \$ 2.919.663, pues en la demanda expresamente se admite que esa fue la última asignación básica de la demandante⁷.

21. Por ende, para calcular el valor de la bonificación durante el año 2017, debía tomarse la asignación básica así: i) para los primeros siete meses (enero a julio) el valor de \$ 4.231.548 y ii) para los dos meses restantes (agosto y septiembre) el valor de \$ 2.919.663.

⁶ Folio 39 del expediente.

⁷ Ver hecho décimo tercero, folio 55 del expediente.

22. A partir de esos datos, la determinación de la cuantía se explica en el siguiente cuadro:

Año	Asignación ⁸ básica	Valor mensual Bonificación (35 %)	Número de meses	Total
2014	\$ 2.581.997	\$ 903.699	3	\$ 2.711.097
2015	\$ 2.751.782	\$ 963.124	12	\$ 11.557.488
2016	\$ 2.919.663	\$ 1.021.883	12	\$ 12.262.596
2017	\$ 4.231.548	\$ 1.481.042	7	\$ 10.367.294
2017	\$ 2.919.663	\$ 1.021.883	2	\$ 2.043.766
Total			36	\$ 38.942.241

23. Lo anterior muestra que la estimación razonada de la cuantía es inferior a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año 2018 (equivalían a \$ 39.062.100) y, por ende, los juzgados administrativos son los que deben conocer el asunto en primera instancia.

24. Finalmente, la Sala expondrá otro hecho indicador que acredita que, por cuantía, el tribunal administrativo carece de competencia para conocer en primera instancia este proceso.

25. En la petición formulada en sede administrativa para reclamar el derecho que ahora discute (cuyas respuestas constituyen los actos administrativos demandados), la demandante pedía por concepto de bonificación los siguientes valores⁹:

- Por todo el año 2014, la suma de \$ 10.447.483.
- Por todo el año 2015, la suma de \$ 10.844.388.
- Por todo el año 2016, la suma de \$ 11.557.486.
- Por todo el año 2017, la suma de \$ 7.153.174.

26. En esa solicitud se reclamó la suma de \$ 10.447.483 por las bonificaciones causadas durante los 12 meses del año 2014, por lo que la bonificación mensual para ese año correspondía a \$ 870.624.

27. Entonces, si se toman en cuenta los valores reclamados para los años 2017, 2016, 2015 y los tres últimos meses de 2014¹⁰ ($\$ 870.624 \times 3 = \$ 2.611.872$), el resultado de la

⁸ Se mantienen las asignaciones básicas relacionadas en la demanda, salvo la del año 2017 que se calculó en la forma descrita en el párrafo 21 de esta providencia.

⁹ Hechos 7, 8, 9 y 10 de la petición en sede administrativa (folios 24-25 del expediente).

¹⁰ No puede tomarse todo el año 2014 por la limitación temporal de los tres años.

cuantía sería de \$ 32.166.920, valor que sigue siendo inferior a los 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

28. En consecuencia, la Sala declarará la excepción previa de falta de competencia para seguir conociendo de este proceso, pero advertirá que todo lo actuado conservará validez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 del Código General del Proceso. Además, se ordenará remitir el presente asunto a los juzgados administrativos de Cali (reparto), para que continúen con el trámite correspondiente.

En mérito de lo expuesto, Sala,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA, por las razones expuestas en la parte motiva, con la advertencia de que todo lo actuado conserva plena validez.

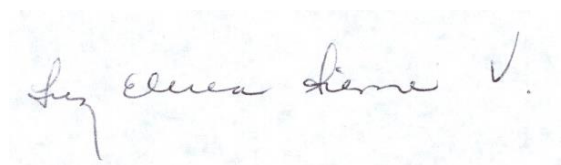
SEGUNDO: REMITIR el expediente a los juzgados administrativos de Cali (reparto), para que continúen con el trámite correspondiente.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia según lo dispuesto por el Decreto 806 de 2020.

Los magistrados



PATRICIA FEUILLET PALOMARES



LUZ ELENA SIERRA VALENCIA



OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT